

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

MEDIO DE CONTROL:	Ejecutivo
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00434-00
DEMANDANTE:	Alba Lucia Caicedo y otros. <a href="mailto:oficinatellez@gmail.com">oficinatellez@gmail.com</a> <a href="mailto:vimattezz@hotmail.com">vimattezz@hotmail.com</a>
DEMANDADO:	Nación – Fiscalía General de la Nación. <a href="mailto:pqrs@fiscalia.gov.co">pqrs@fiscalia.gov.co</a>
ASUNTO:	Librar mandamiento de pago

Auto No. \_\_\_\_\_

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el despacho<sup>1</sup> decidir sobre la solicitud de mandamiento de pago presentada por las señoras Alba Lucia Caicedo y Luz Marina Caicedo y los señores Juan David Cerón Caicedo y Daniel Felipe Cerón Caicedo, a través de apoderado judicial, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, quienes al efecto hicieron estas peticiones:

*“(…) PRIMERA. - Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor de ALBA LUCIA CAICEDO, y en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación, todo ello como capital adeudado desde la ejecutoria del 16 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes y en pesos el capital es la suma de: ochenta y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos (\$88.994.899).*

*SEGUNDA. - Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene pagar y reconocer por parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación, a favor de Alba Lucia Caicedo, los intereses moratorios debidos desde el 16 de agosto de 2018 hasta el pago efectivo de la obligación. (Acorde a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999, Mag. Ponente José Gregorio Hernández Galindo, por ser condenas contra el estado).*

*TERCERA. - Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor de Daniel Felipe Cerón Caicedo, y en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación, todo ello como capital adeudado desde la ejecutoria del 16 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes y en pesos el capital es la suma de: cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta pesos (\$54.686.940).*

*CUARTA. - Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene pagar y reconocer por parte de la Nación – fiscalía general de la Nación, a favor de Daniel Felipe Cerón Caicedo, los intereses moratorios debidos desde el 16 de agosto de 2018 hasta el pago efectivo de la obligación. (Acorde a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999...).*

<sup>1</sup>El artículo 125 CPACA dispone: “Las Salas, Secciones y Subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: “(…) g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia (...)” 3. Será de Magistrado Ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia (...)”. Por su parte el Artículo 125 dispone: “Son apelables (...) y los siguientes autos proferidos en la misma instancia [Refiriéndose a la primera instancia]: 1. “(...) y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo”.



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**ACCIONANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**ACCIONADO** : Fiscalía General de la Nación

2

*QUINTA. - Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor de JUAN DAVID CERÓN CAICEDO, y en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación, todo ello como capital adeudado desde la ejecutoria del 16 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes y en pesos el capital es la suma de: cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta pesos (\$54.686.940).*

*SEXTA. - Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene pagar y reconocer por parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación, a favor de JUAN DAVID CERÓN CAICEDO, los intereses moratorios debidos desde el 16 de agosto de 2018 hasta el pago efectivo de la obligación. (Acorde a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999, Mag. Ponente José Gregorio Hernández Galindo, por ser condenas contra el estado).*

*SÉPTIMA. - Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento ejecutivo a favor de LUZ MARINA CAICEDO, y en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación, todo ello como capital adeudado desde la ejecutoria del 16 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que la condena se produjo en salarios mínimos legales mensuales vigentes y en pesos el capital es la suma de: veinte tres millones cuatrocientos treinta y siete mil doscientos sesenta pesos (\$23.437.260).*

*OCTAVA. - Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene pagar y reconocer por parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación, a favor de LUZ MARINA CAICEDO, los intereses moratorios debidos desde el 16 de agosto de 2018 hasta el pago efectivo de la obligación. (Acorde a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999, Mag. Ponente José Gregorio Hernández Galindo, por ser condenas contra el estado).*

*NOVENA. - Que, como consecuencia de lo anterior, sírvase señor Juez ordenar pagar y reconocer por parte de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a favor de ALBA LUCIA CAICEDO, JUAN DAVID CERON CAICEDO, DANIEL FELIPE CERON CAICEDO y LUZ MARINA CAICEDO, de condiciones civiles ya anotadas, los costos y costas del proceso. (...)."*

## II. ANTECEDENTES

Mediante sentencia dictada dentro del proceso de reparación directa No. 760012331000-**2002-00086-00** proferida por la Sección Tercera Subsección "A" del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, ejecutoriada el 16 de agosto de la misma anualidad<sup>2</sup>, se consideró patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora Alba Lucía Caicedo.

Los rubros y montos reconocidos en la sentencia fueron los siguientes:

*"(...) **SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** a pagar por concepto de perjuicios morales a Alba Lucía Caicedo, Daniel Felipe Cerón Caicedo y Juan David Verón Caicedo la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno; a la señora Virginia Caicedo Buen Día la suma*

<sup>2</sup> Ver folio 23 archivo magnético "Prueba 4.1.1\_sentencia de segunda instancia 21 de junio de 2018".



RADICACIÓN : 2021-00434-00  
MEDIO DE CONTROL : Ejecutivo  
ACCIONANTE : Alba Lucía Caicedo y otros  
ACCIONADO : Fiscalía General de la Nación

3

*equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, a la señora Luz Marina Caicedo, la suma equivalente a treinta (30) salarios legales mensuales vigentes.*

**TERCERO: CONDENAR** a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar como indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y, a favor de la señora Alba Lucía Caicedo, suma de veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil diecisiete pesos (\$24.448.017).

**CUARTO: CONDENAR** a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar como indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y a favor de la señora Alba Lucía Caicedo, suma de nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos (\$9.859.942). [...].”

El 4 de diciembre de 2018, el apoderado de los beneficiarios presentó cuenta de cobro<sup>3</sup> ante la entidad demandada con todos los documentos requeridos para el pago.

La solicitud fue aceptada<sup>4</sup> mediante oficio No. 20181500077461 de diciembre 14 de 2018, bajo el turno de pago 5 de diciembre de 2018.

### III. CONSIDERACIONES

#### 3.1. De la jurisdicción y competencia.

Así las cosas, comoquiera que en el *sub lite* el título ejecutivo base de recaudo lo constituye la sentencia dictada el 21 de junio de 2018, ejecutoriada el 16 de agosto de 2018 y; que la competencia por el factor conexidad o “*forum conexitatis*” adscribe como llamado a ejecutar una sentencia a quien la profirió, esta Sala resulta ser la competente para conocer del proceso ejecutivo de la referencia por haberle correspondió su conocimiento y resolución en primera instancia y obviamente su sustanciador de entonces, lo será en la ejecución.

#### 3.2. De la aplicación de las normas procesales en el tiempo.

En el *sub lite* lo que le corresponde al despacho es decidir sobre el medio de control ejecutivo presentado, el 7 de octubre de 2020 corresponde al despacho imprimir a la presente actuación el trámite dispuesto en las normas procesales previstas en la Ley 2080 de 2021, sin perjuicio de lo señalado por la jurisprudencia frente al reconocimiento de intereses de mora y el término de exigibilidad de la obligación habida consideración que el proceso que dio origen a este ejecutivo corresponde a un proceso que se tramitó en vigencia del Decreto 01 de 1984.

#### 3.3. Del trámite que se debe imprimir al proceso ejecutivo.

<sup>3</sup>[https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/Eao8waNn\\_yIEnKze8qKMZJgBL11u7th7jS0LMH\\_AiBB9Xlg?e=8zAhJh](https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/Eao8waNn_yIEnKze8qKMZJgBL11u7th7jS0LMH_AiBB9Xlg?e=8zAhJh).

<sup>4</sup>[https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/ETw\\_kwKov9tFjM8tXtv-b1UBNgdNycZQDq3HPF6N2feyxw?e=ZyEeCo](https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/ETw_kwKov9tFjM8tXtv-b1UBNgdNycZQDq3HPF6N2feyxw?e=ZyEeCo).



RADICACIÓN : 2021-00434-00  
MEDIO DE CONTROL : Ejecutivo  
ACCIONANTE : Alba Lucía Caicedo y otros  
ACCIONADO : Fiscalía General de la Nación

4

En relación con el trámite que se debe adelantar para seguir la ejecución de títulos provenientes de condenas judiciales que imponen la obligación de pagar una suma de dinero, el artículo 298<sup>5</sup> de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo **80 de la Ley 2080 de 2021** dispone que una vez vencido el término con que cuenta la administración para dar cumplimiento a las sentencias sin que la entidad haya cumplido con la condena impuesta, el juez competente, a solicitud del acreedor, **librará mandamiento ejecutivo** de acuerdo con las reglas previstas en el Código General del Proceso (CGP) para la ejecución de providencias.

La norma del CGP a la que se refiere la Ley 1437 de 2011 en su remisión, es en concreto el artículo 430 de dicho ordenamiento y en especial su aparte que aquí interesa, cual es el inciso primero que establece:

*“**Artículo 430.** Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal. (...)”* (Subraya esta Sala Unitaria)

Lo anterior, sin perjuicio de que la notificación del mandamiento ejecutivo a entidades públicas se surta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

### 3.4. De la caducidad de la acción ejecutiva.

De acuerdo con el literal k) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 el término para solicitar la ejecución sería de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación.

En el presente asunto se tiene que la demanda de reparación directa fue presentada en vigencia del Decreto 01 de 1984 y que la misma culminó con la aplicación del citado régimen conforme lo señalado. Luego, a efectos de conocer la fecha en que se hizo exigible la obligación debemos recurrir a lo previsto en el artículo 177 del CCA sobre el particular.

De conformidad con el artículo 177 del CCA, en tratándose de sumas de dinero, las condenas solo serían ejecutables **18 meses después** de la ejecutoria de la providencia que contiene la obligación, lo cual ocurrió en el presente caso, el día 16 de agosto de 2018.

<sup>5</sup> “**Artículo 298. Procedimiento.** Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192<sup>5</sup> de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.

Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.

**Parágrafo.** Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”. (Subrayas fuera del texto)



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**ACCIONANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**ACCIONADO** : Fiscalía General de la Nación

5

En ese sentido, la presente obligación se hizo exigible desde el pasado 16 de febrero de 2020 y será a partir de esa fecha que se podrá iniciar la contabilización del término de caducidad de 5 años.

Luego comoquiera que en el presente asunto la sentencia de reparación directa fue dictada de conformidad con el CCA y acorde con lo expuesto, en esos casos, el término de 5 años debe ser contabilizado a partir de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, es claro que la parte actora tendría inclusive hasta el año 2025 para demandar, siendo presentada la demanda ejecutiva en oportunidad.

### **3.5. Del cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la ley.**

Revisada la solicitud, se tiene que la parte actora está legitimada en la causa por activa, en su condición de beneficiarios de la condena impuesta.

Por su parte, la Nación – Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por ser la condenada en la mencionada sentencia.

Revisada la demanda, la misma cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y subsiguientes del CGP (designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos fundamento de las pretensiones).

## **IV. CASO CONCRETO**

En el *sub lite*, se aportó el título ejecutivo, esto es, copia auténtica de la sentencia de segunda instancia del 21 de junio de 2018, título ejecutivo que se pretende ejecutar, se evidencia que la misma comprende una obligación clara y expresa, toda vez que contienen una condena contra la parte que resultó vencida en el proceso ordinario que dio origen a la acción ejecutiva, siendo actualmente exigible al quedar ejecutoriada la mencionada providencia, vale decir que han pasado más de dieciocho meses desde la mencionada fecha hasta la radicación del presente trámite ejecutivo.

Se trata por tanto de un título ejecutivo singular respecto del cual, aplicado las reglas al caso concreto, se tiene que las mismas se cumplen, por cuanto en lo que respecta:

a) Expresividad. La obligación se encuentra debidamente delimitada, hay certeza respecto de su contenido, sus términos, sus condiciones y su alcance. En efecto, se trata del reconocimiento de una suma de dinero a título de indemnización a través de una sentencia judicial.

b) Claridad, en tanto en cuanto se encuentran plenamente identificados tanto el deudor, vale decir, Fiscalía General de la Nación, y como el acreedor, en este caso la parte ejecutante citada al inicio de esta providencia.





**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**ACCIONANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**ACCIONADO** : Fiscalía General de la Nación

6

c) Exigibilidad, porque ella no se encuentra sujeta a plazo o condición. De hecho, señalaba el artículo 177 del CCA –normatividad que regentó el proceso ordinario– que las condenas serían ejecutables ante la “*justicia ordinaria*” –hoy contenciosa administrativa por mandato del artículo 134B.7 *ibidem*–, dieciocho (18) meses después de ejecutoriada.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el título base de la ejecución cumple a cabalidad con las exigencias formales de los artículos 306 del CGP y contienen una obligación expresa, clara y exigible, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 422 del CGP, y que no ha operado el fenómeno de caducidad frente al título base de recaudo.

La Sala Unitaria procederá a librar el correspondiente mandamiento de pago en los términos de la sentencia de segunda Instancia, de fecha 21 de junio de 2018 proferida por el H. Consejo de Estado con radicación 76001-23-31-000-2002-00086-02 y la cuenta de cobro se presentó 24 de agosto de 2018.

No obstante, aclara esta misma Sala Unitaria, pese a que las sumas reclamadas fueron liquidadas por la parte ejecutante, librará el mandamiento al tenor de lo especificado en la sentencia título de recaudo, habida cuenta que el artículo 430 del CGP permite que se libre mandamiento en la forma pedida o *en la que el juez considere legal*.

## V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

### RESUELVE

**PRIMERO. - LIBRAR** mandamiento de pago en contra de la Fiscalía General de la Nación y a favor de las señoras Alba Lucía Caicedo y Luz Marina Caicedo y los señores Juan David Cerón Caicedo y Daniel Felipe Cerón Caicedo de conformidad con lo establecido en la sentencia de segunda instancia, de fecha 21 de junio de 2018 proferida por el H. Consejo de Estado con radicación 76001-23-31-000-2002-00086-02.

**SEGUNDO. - ORDENAR** al demandando a cancelar la obligación dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal de esta providencia, según lo establecido en el artículo 442 del CGP.

**TERCERO. - NOTIFICAR** personalmente el presente proveído a la Fiscalía General de la Nación (*parte ejecutada*), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 198 y 199<sup>6</sup> del CGP.

**CUARTO. - NOTIFICAR** personalmente el presente proveído al Procurador Judicial de Asuntos Administrativos delegado ante este Tribunal y a la Agencia Nacional de

<sup>6</sup> Artículo 199. [Modificado por el art. 48, Ley 2080 de 2021](#)

RADICACIÓN : 2021-00434-00  
MEDIO DE CONTROL : Ejecutivo  
ACCIONANTE : Alba Lucía Caicedo y otros  
ACCIONADO : Fiscalía General de la Nación



Defensa Jurídica del Estado, en aplicación de los artículos 197 y 198 numerales 3º y 4º del CPACA y 612 del CGP.

**QUINTO. - NOTIFICAR** a la parte ejecutante por inserción en los estados electrónicos, conforme a los artículos 171 numeral 1º y 201 del CPACA.

**SEXTO. -** Se advierte a los sujetos procesales que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021<sup>7</sup>, la contestación de la demanda y demás memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán presentarse al correo electrónico de la secretaria [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co), con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales, **indicando con claridad el número de radicado del proceso con los 23 dígitos, nombre del magistrado ponente, nombre del demandante y el asunto.**

**SEPTIMO. - RECONOCER** personería al Doctor Víctor Manuel Téllez Cobo, identificado con cédula de ciudadanía número 16.697.568 de Cali, y tarjeta profesional N° 49.643 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe como apoderado de la parte ejecutante<sup>8</sup>.

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE**

**OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA**  
**Magistrado**  
(Firma electrónica SAMAI).

<sup>7</sup>Artículo 46. Modifíquese el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:  
*Artículo 186.* Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.  
Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.  
(...) **Parágrafo.** En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.  
<sup>8</sup> “**Artículo 77.** Facultades del apoderado. <sic> Salvo estipulación en contrario, el poder para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios, de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella.  
El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante.  
El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita al apoderado para reconvenir y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvenición y la intervención de otras partes o de terceros.  
El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma; tampoco recibir, allanarse, ni disponer del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa.  
Cuando se confiera poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados judiciales, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado.”